

Coyhaique, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En Rol de esta Corte N°3-2025, que tiene incidencia en causa R.I.T. O-3-2024, del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Cisnes, se dictó sentencia en autos sobre accidente del trabajo, caratulados “LAVOZ/ HOTELERA Y ESPACIO TIEMPO LIMITADA”, con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, por la Srta. Juez subrogante, doña Carolina Valeska Martínez Navarrete, en la que se resolvió:

“I.- Que SE RECHAZA la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta con fecha 20 de febrero de 2024 por PEDRO CRISTOBAL IBARRA SÁNCHEZ, en representación de don CARLOS HILARIO LAVOZ VILLARROEL cédula nacional de identidad N°19.541.098-4, en contra de HOTELERA ESPACIO Y TIEMPO LIMITADA, RUT 96.635.760-6, representada legalmente por don ALAN ROBERTO VASQUEZ CHAVEZ,

II. – Que no se condena en costas a la demandante, por estimar que ha obrado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.”

Contra dicho dictamen jurisdiccional ha recurrido de nulidad, el abogado, don Félix Ramos Molina, en representación del trabajador demandante, ya singularizado, fundándose en la causal contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 459 N°4, ambos del Código del Trabajo, que estipulan: **“Artículo 478.** *El recurso de nulidad procederá, además: e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue,(...)”.* En tanto el segundo precepto citado previene: **“Artículo 459.** *La sentencia definitiva deberá contener:*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPEHXTSKRKL

(...) 4.- *El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación.*”

En subsidio, formuló la causal del artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal, esto es, *“b) cuando haya sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”*.

Tras exponer el sustento de sus alegaciones, culminó solicitando tener por interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, ya singularizada, declararlo admisible y se *“resuelva que se acoge el mismo, dictando sentencia de reemplazo conforme lo mandata el artículo 478 inciso 8° del Código del Trabajo, en el sentido de acoger en todas sus partes la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, por los montos demandados o los que en derecho determine, ello por la causal del artículo 478 letra e) o en subsidio por la causal del artículo 478 letra b), ambas del Código del trabajo, con costas y costas del recurso”*.(sic)

En audiencia llevada a cabo el 12 de marzo recién pasado se procedió a la vista del recurso, con la concurrencia y alegatos del mentado letrado recurrente y del abogado don Rodolfo Knokpe Beroíza, en representación de la empresa recurrida, ambos desde la plataforma virtual, tras lo cual la causa quedó en estado de dictarse el acuerdo que a continuación se transcribe.

OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a título de prolegómeno, debe tenerse en cuenta que el recurso de nulidad constituye un método de impugnación de derecho estricto, que tiene por finalidad, sea invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda, cuando se ha incurrido en alguno de los vicios que la ley señala y siempre que ello, además, haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Se trata, entonces, de un recurso de derecho estricto, el cual debe ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo que su



procedencia estará siempre limitada, en primer término, por la naturaleza de las resoluciones impugnadas; en segundo lugar, por las causales expresamente establecidas en la ley y, finalmente, por las formalidades que debe cumplir el escrito pertinente en cuanto al modo en que se interponen esas causales, en este caso, una en subsidio de la otra; lo cual determinará el orden del examen a realizar en esta sentencia.

I.- En cuanto a la causal contemplada en el artículo 478 letra b) en relación con el artículo 459 N°4, ambos del Código del Trabajo.

SEGUNDO: Que, bajo el anunciado paraguas conceptual, puede advertirse que, en definitiva, el meollo del reclamo de invalidación efectuado está orientado por la atribución de infracción manifiesta al deber de analizar en la sentencia toda la prueba rendida, los hechos que se estimen probados y el razonamiento que conduce a esa estimación, estribando el achaque, en último término, en haber constatado el recurrente que la magistrada del tribunal *a quo* incurrió en el vicio de omisión de análisis probatorio, a consecuencia de lo cual concluyó que no procedía la indemnización de perjuicios perseguida, sobre la base de la exigencia impuesta en los puntos 2 y 3 de la interlocutoria de prueba que fuera fijada. En efecto, enfatiza que no fue analizado, sino sólo mencionado como prueba del demandante en el considerando cuarto, el expediente de fiscalización N° 1105-2023-243, que incluye actas de charlas y procedimientos de la empresa, incorporado en el considerando quinto como documental N°5, conforme al instrumento agregado en folio 30 del expediente virtual, en el que se da cuenta de la denuncia realizada por el trabajador el 7 de noviembre de 2023, ante la Inspección del Trabajo, por no haber adoptado el empleador las medidas tendientes a proteger la salud del trabajador, en virtud de lo cual se realizó la correspondiente visita inspectiva el día 16 de ese mismo mes, en la que se entrevistó a quien figura como doña Libia Palacios, gerente de la empresa, la que



reconoció que no contaban con un protocolo para accidentes del trabajo o enfermedades profesionales ni tampoco con un procedimiento de trabajo seguro de la labor de carpintería, por lo que cabía inferir que se detectaron las infracciones consecuenciales. Añade que en una segunda visita inspectiva, realizada en el oficio de la propia Inspección del Trabajo el 23 de abril del mismo año, fueron acompañados los mentados protocolos, por lo que se estimó corregidas las infracciones detectadas sin que fueren cursadas multas a la empresa. Acota, sin embargo, que no haber cursado las multas no evitó la producción del accidente, volviendo a afirmar que a la fecha de ese episodio no existían esos protocolos, por lo que se produjo incumplimiento de la empresa respecto a su obligación de protección a la vida y salud de sus trabajadores, conforme al artículo 184 del Código del Trabajo, no importando la corrección posterior, pues el accidente ya había ocurrido 43 días antes de la misma, lo que, de hecho, el Tribunal dejó establecido en el considerando décimo primero, en el sentido que el accidente ocurrió el 11 de octubre de 2023 (pág. 26 parte final y 27 parte inicial). Por último, en esta parte remata indicando que el considerando décimo primero (pág 27), con desacierto, expresa al respecto: *“...No resulta vinculante la prueba de la demandante que dice relación con el informe de fiscalización de la inspección del trabajo, ya que si bien se califica como accidente laboral, no hubo un accidente grave o fatal...”*, conclusión que estima de gravedad, por la pertinencia del documento y su impacto directo en la determinación de la responsabilidad del empleador, gozando el acta del inspector del trabajo de presunción (sic) por haber actuado como ministro de fe de lo que constata, de conformidad al artículo 503 inciso 1º del Código del Trabajo.

Reporta, asimismo, la falta de análisis de la documental, no objetada, consistente en el informe psicológico del profesional Rodrigo Higuera, enunciado en el número 6 de la documental de su parte, que da cuenta de una serie de trastornos psicológicos derivados de la fractura



del dedo pulgar izquierdo causado a su representado, a saber: afectación de su calidad de vida diaria, interrupción abrupta en su proyección vital en lo laboral, generando barreras cognitivas y emocionales, provocando estados de impotencia y frustración, observándose signos de retraimiento y aislamiento, con sintomatología de re-experimentación, evitación, alteraciones cognitivas del estado de ánimo y reactividad psicofisiológica (alerta permanente, dificultades para conciliar y mantener el sueño), trastorno de insomnio persistente, evidenciando un Trastorno de Estrés Post- Traumático (TEPT); a todo lo cual se acusa que la juzgadora se limitó a su sola mención dentro del considerando cuarto, exponiendo en el décimo primero restarle valor probatorio por no haber concurrido a declarar quien lo emitió de manera que tal ausencia y la imposibilidad de contrainterrogatorio vulneraba el debido proceso (pág. 27 parte final), en circunstancias que, en su criterio, lo que se afectó con esa decisión fue la libertad de prueba y la naturaleza y pertinencia de la documental, no objetada, rendida de acuerdo a los artículos 453 y 454 del Código del Trabajo, por no ser pericial, exigiendo por ende algo improcedente y dejando de analizar los daños provocados a causa del accidente motivado por no tener protocolos ni procedimientos de trabajo seguro.

Enseguida, sostiene que tampoco fue examinada la absolución de posiciones de la demandada, en los dichos del representante legal de la empresa, don Alan Vásquez Chávez, conforme lo desarrollado en la parte inicial de la página 22 del texto de la sentencia, quien reconoció que no existía protocolo especial ligado al trabajo de carpintería, admitiendo que con ocasión de la segunda visita inspectiva sí contaron con él, manifestando que cuando se produjo la corrección de la infracción el trabajador estaba con licencia médica, con lo que se veía ratificada la inexistencia de protocolos y procedimientos de trabajo seguro con anterioridad, particularmente, a la fecha del accidente, quedando claro, en su concepto, que no se cumplió con las



obligaciones de protección de vida y salud de los trabajadores, por lo que la empresa era responsable de la ocurrencia del accidente.

Censura también la decisión del tribunal, al recoger en el considerando DECIMO PRIMERO (página 27 parte media del párrafo), la declaración de Iván Esteban Lavín Osses, Prevencionista de Riesgos, como base para determinar la propia exposición imprudente al riesgo de parte del trabajador, el cual relata cómo habría ocurrido el accidente pese a no haber estado presente aquel día, a diferencia de los dichos de su propio representado (consignados en el considerando quinto página 25), de los que no podía desprenderse una conclusión similar a esa, denotando que no fueron analizados y concediendo, en su lugar, valor a la experiencia del profesional y a la circunstancia de haber corroborado que el año 2018 se había confeccionado y presentado en la Inspección del Trabajo un protocolo de todos los riesgos que implicaban las labores, lo cual también se tuvo por concordante con el oficio agregado como prueba, en que la ACHS corroboró la existencia del Protocolo Planilla de obligación de informar. De este modo, el aludido prevencionista concluyó del tenor de la propia declaración del trabajador, a quien se le exhibió la máquina lijadora, que éste realizó una mala manipulación de la misma, ya que contaba con los elementos necesarios de protección para efectuar dicha labor, por lo que se expuso a un riesgo que generó finalmente el accidente laboral sin que se demostrase la responsabilidad de la empresa en lo ocurrido, ni se lograra visualizar incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Lo anterior, estima el recurrente, denota que se analizó sólo la prueba de la demandada, en este caso la testimonial que emana de la misma parte y que corresponde a una opinión técnica, que relata cómo habría ocurrido el hecho pese a admitir que no estuvo presente al momento del accidente, lo que pondera estar alejado de las reglas procesales en materia laboral.



Añade, finalmente, que en la diligencia de exhibición documental hay una serie de instrumentos no acompañados en su totalidad, dentro de los que detalla: 1.Registro de entrega y recepción de reglamento interno, de fecha 16/06/2023 (página 1 del documento), 2. Registro de charla de seguridad de fecha 16/06/2023 (página 2 del documento), 3.Obligación de informar riesgos laborales de fecha 16/06/2023 (páginas 3, 4 y 5 del documento), 4. Obligación de informar protocolo Covid de fecha 17/06/2023 (páginas 6 y 7 del documento) y 5.Ficha técnica de prevención de riesgo de fecha 05/09/2023 (páginas 8 y 9 del documento), además de acompañar a folio 85 el reglamento interno de orden higiene y seguridad.

De ellos colige que su representado fue objeto de capacitación sólo al inicio de la relación laboral (junio 2023) y que sólo estuvo presente en charlas, pero no se especifica cuáles son ni tampoco consta que se le hayan proporcionado elementos de protección personal. Asevera, en tal contexto, que la protección que contempla el artículo 184 del Código del Trabajo debe ser constante y eficaz, estimando que una charla única no es eficaz al efecto, lo que trajo aparejado el accidente del trabajo cuya indemnización se persigue, siendo responsable la empresa hasta de la culpa levísima, conforme al artículo 69 de la Ley N°16.744. Cita jurisprudencia al efecto.

TERCERO: Que, por el contrario, el asesor letrado de la empresa sostuvo, en síntesis, que no concurrían las causales de nulidad subsidiariamente invocadas por el recurrente, pues, habiendo girado la argumentación de la contraria en torno al informe de fiscalización, únicamente se verificó divergencia con el criterio del inspector del trabajo, ya que se comprobó posteriormente que existían protocolos, procedimientos de trabajo seguro y Reglamento de Higiene y Seguridad desde el año 2018, debidamente registrados ante la autoridad. Hizo presente, además, que no hubo una investigación formal del accidente, puesto que sólo corresponde efectuarlo en caso que estos sean fatales o graves y éste no lo fue.



Por otro lado, refiere que el impugnante alega una serie de perjuicios sufridos por el trabajador, pero ello se contrapone con la ficha clínica del mismo, por cuanto consta en ella que no adhirió a los tratamientos médicos ni a la kinesiterapia, además de haber mantenido una causa paralela por falso testimonio en juicio y haber permanecido fuera del país. Destaca también que en la absolución de posiciones, inclusive, se consultó al actor por qué no se había presentado ante el médico, respondiendo que sólo debía hacerlo si tenía secuelas, las que reconoció no haber padecido, lo que se vio ratificado con su ficha clínica, de manera que no hay perjuicios que indemnizar.

Por último, invoca que la sentencia se basta a sí misma al analizar los medios de prueba y no arribar a la convicción de responsabilidad de la empresa, sino a una del propio trabajador, quien se accidentó con una máquina de uso doméstico operada con guantes, además de haber sido inducido en sus labores mediante charlas, que constan debidamente, por lo que se cumplió cabalmente en el fallo con los requisitos legales de orden formal y, en su valoración, con las reglas de la sana crítica sin haber generado convicción acerca de la responsabilidad del empleador en el accidente, como tampoco respecto de la circunstancia de haber sufrido el trabajador perjuicios dada la ausencia de secuelas, sin que tenga cabida, por ende, la indemnización de un daño inexistente.

CUARTO: Que, a fin de ordenar las ideas concernientes al asunto que se plantea, cabe dejar establecido que el Tribunal del grado, tras exponer las posiciones de cada parte entre los considerandos primero y segundo del fallo, procedió a centrar el objeto de análisis en el tercero mediante la mención de los puntos pertinentes, sustanciales y controvertidos que debían ser objeto de acreditación, para reproducir luego, en síntesis, el contenido esencial de las pruebas aportadas por el demandante en el cuarto y por la demandada en el quinto. Acto continuo, entre el sexto y séptimo, con acierto determinó las reglas básicas del derecho común que resultaban aplicables en la



especie (artículo 1437 y 2314 del Código Civil), para en el octavo precisar los requisitos que, conforme a la jurisprudencia y también la doctrina, hacían procedente ordinariamente el pago de una indemnización de perjuicios con ocasión de la comisión de un ilícito civil, detallando: la existencia de una acción u omisión del demandado, dotada de culpa o dolo, que sea productora de un daño, menoscabo o perjuicio para el actor, siempre y cuando entre el hecho ilícito y el daño exista el necesario nexo causal. Remata en el décimo extendiéndose respecto de los alcances de la responsabilidad, para distinguir entre la contractual y extracontractual, a fin de dejar zanjado que por la vía de este instituto se procura restaurar el orden jurídico alterado frente al incumplimiento de obligaciones, cualquiera sea su fuente.

Es en el décimo primero, entonces, donde la magistratura de la instancia se dedica a efectuar un análisis de la prueba rendida, a fin de arribar a las conclusiones que de ella se derivan, el cual constituye precisamente el foco de la reprobación expuesta por el recurrente.

QUINTO: Que, lo primero a indicar, es que resulta efectivo, conforme se denunció en el alegato, que el décimo primero se trata de un motivo concentrado y escueto, lo cual en modo alguno resulta ser necesariamente un defecto, en la medida que el abordaje analítico que en él se efectúe sea el idóneo.

En tal orientación, de la lectura del razonamiento contenido en él logra detectarse que, la sentenciadora ha abarcado la prueba reseñada en los apartados previos del fallo de modo suficiente, sin que se aprecie la presencia de la acusada omisión de análisis, de suerte, por un lado, que el informe de fiscalización que tanto se echa en cuenta aparece expresamente mencionado como uno de los elementos integrantes del examen jurisdiccional, aun cuando haya terminado siendo desvalorado, esencialmente, porque si bien se reconoció a partir de él la existencia del accidente producido en contexto laboral, se ponderó con criterio lógico la magnitud del mismo y se contrastó ese



elemento con otras pruebas aparejadas al juicio, como lo es la declaración del Prevencionista de Riesgos, Sr. Lavín Osses. En efecto éste, sobre la base de la vista de los antecedentes y pese a no haber estado presente el día y en el lugar del hecho, considerando aquéllos en comparación con la versión del propio trabajador - que se reprocha también supuestamente omitida-, infiere que lo que convergió en la especie fue una exposición imprudente al riesgo por parte de este último. Representa también que se demostró existir protocolos previos en la empresa desde el año 2018, en circunstancias que la incorporación del trabajador se produjo a mediados de 2023, a pesar de no haber sido hallado un procedimiento específico de seguridad ligado a trabajos de carpintería, lo cual fue refrendado por similar reconocimiento prestado por el gerente general de la empresa, Sr. Vásquez Chávez, en su absolución de posiciones. Por lo demás, no mueve a extrañeza la carencia de una especie de procedimiento tan puntual como el exigido, dado el giro específico del negocio de la empleadora – comercial, turístico y hotelero -, a lo que se añade el desprendimiento, a partir de la prueba rendida incluida una vez más la declaración del propio dependiente que demanda, de la proporción de guantes como elemento de seguridad para el desarrollo del pulido del letrero del establecimiento, cuyo enredo con la máquina lijadora en el acto de su manipulación fue el que ocasionó el accidente.

De esta suerte, se va desdibujando la imputación omisiva realizada.

SEXTO: Que, por otro lado, tampoco es significativo y, por ende, adolece de trascendencia en el contexto global del fallo, que no se haya realizado una mención expresa a la evaluación sustantiva del informe psicológico ligado a la tan amplia afectación de ese orden, que se reporta producida en la *psique* del trabajador a consecuencia de la fractura de un dedo pulgar, por cuanto ello va encaminado en línea congruente con el descarte por la juzgadora de la existencia de un vínculo causal entre una acción u omisión relevante del empleador, que



trasuntara en la producción culposa o dolosa del daño irrogado, de manera que innecesario se colige haber ahondado sobre el mérito de fondo de dicha probanza, más allá de su desestimación concreta en la sentencia por razones de orden formal, estas últimas que, en todo caso, legítimamente también pueden ser ponderadas como elementos usualmente necesarios para contribuir a formar la convicción de quien juzga, como lo hubiera sido en este caso el aporte de algún testimonio afín en refuerzo del documento aparejado, máxime considerando el régimen de apreciación probatorio informado por la persuasión racional, integrada por la conocida tríada de parámetros.

Se suma a lo reflexionado, finalmente, que no resulta del todo ser correcta la reprobación de falta de análisis, desde que el considerando de clausura, designado como décimo quinto, da cuenta de un cierre argumental comprensivo de toda la restante prueba incompatible, permitiendo explicar el silencio puntual acusado.

SÉPTIMO: Que, se debe culminar señalando que no aparece constitutivo de vicio anulatorio el supuesto acompañamiento parcial de la documental antes detallada por el impugnante, toda vez que en ningún momento la sentencia adujo, con fundamento en la misma, a la efectiva comprobación de la existencia de capacitaciones permanentes respecto del trabajador y, particularmente, respecto del procedimiento de trabajo correcto asociado a la manipulación de una lijadora, sino que se desprende haber centrado más bien su apreciación en el escrutinio del nexo causal entre el hecho y el daño, que no vislumbró convergente entre esa ausencia de específica capacitación continua y el resultado lesivo para el trabajador que el accidente produjo en contexto laboral, incidente, por lo demás, debidamente atendido en la entidad clínica especializada (ACHS) y abordado mediante el reposo médico compatible – más allá del alcance de la adherencia del paciente a las recomendaciones de tratamiento prescritas-; de manera que, acertadamente, no se infirió aquello como constitutivo del incumplimiento por el empleador del deber de seguridad de la salud y



vida del trabajador, que impone el citado artículo 184 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que, de este modo, los negativos epítetos valorativos vertidos por el recurrente respecto del dictamen jurisdiccional no pasan de ser apreciaciones de insatisfacción natural frente a la evaluación de conjunto del caso efectuado por la magistratura de la instancia, considerando sus diversas aristas y circunstancias relevantes, que no alcanzan, sin embargo, para erigirse en un déficit propicio para la pretendida invalidación del fallo por esta vía.

II.- En cuanto a la causal subsidiaria contemplada en el artículo 478 letra e) en relación con el artículo 456, ambos del Código del Trabajo.

NOVENO: Que, incumbe ahora ocuparse de la atribución subsidiaria de deficiencia de validez de la sentencia, que se ha hecho consistir en el reproche de vulneración manifiesta de las reglas de apreciación de la prueba conforme al régimen de sana crítica, al representar el deber de la magistrada de haberse guiado por los parámetros de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados en la tarea de valoración, destacando dentro de los primeros la transgresión a los principios de identidad y de no contradicción, así como desacreditando el fallo por no haber tomado en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, de manera que, contrario a lo exigido legalmente, el examen que se efectuó en él condujo, en su criterio, a una conclusión no convincente ni alejada de una apreciación arbitraria de los mismos, patentizando que *“a pesar de lo acreditado por la prueba rendida en autos por cada una de las partes igualmente se concluyó erróneamente, que el accidente del trabajo sufrido por mi representado con fecha 11 de octubre de 2023, ocurrió producto de haberse expuesto imprudentemente al daño, exculpando de responsabilidad al*



empleador, y en consecuencia rechazó la acción de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo ”(sic).

DÉCIMO: Que, en este rubro, ha de tenerse por núcleo de la censura la citada infracción a la regla de la no contradicción, en cuya virtud se sostiene que *“una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o verdadera, al mismo tiempo”,* como también a la regla de la identidad, por la cual se asegura que *“una cosa sólo puede ser lo que es y no otra ”.*

En el contexto de esta causal el recurrente vuelve a hacer alusión y, a la hora del acotado desarrollo sustancial que en este tópico efectuó, se remite a lo ya expresado a propósito del otro motivo de nulidad invocado, respecto del informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo de Cisnes, informe psicológico del profesional Rodrigo Higuera, absolución de posiciones del representante de la empresa, don Alan Vásquez Chávez, y la carencia de exhibición total de la documental referida en el acápite precedente, para culminar sosteniendo, en suma, que no entiende de qué forma se llegó a resolver denegando su petición en orden a hacer responsable, vía indemnización de perjuicios, a la entidad empleadora, si se dio por establecida la ocurrencia del accidente del trabajo y la falta a esa fecha de protocolos de seguridad y procedimiento de trabajo correcto de carpintería.

UNDÉCIMO: Que, sin embargo, como aproximación a la temática en cuestión, no debe perderse de vista que la producción de un accidente con resultado lesivo en contexto laboral no genera forzosamente responsabilidad del empleador, sino sólo cuando se logra acreditar que ha existido una acción u omisión culpable de parte de éste, que aparezca conectada con la producción de la referida consecuencia.

En la situación que se ha conocido es patente que no ha existido la esgrimida vulneración al principio de identidad ni al de no contradicción - íntimamente relacionados desde la perspectiva lógica -,



al ser contrastados con la ponderación de las pruebas rendidas en el juicio, de suerte que, según ya se ha dicho, la judicatura del *a quo* arribó a una clara convicción concordante con el mérito que le arrojaron los medios de acreditación aparejados, la cual no ha sido otra que la inconcurrencia de nexo causal entre la acción u omisión del empleador, como lo ha sido, con mayor especificidad, la admitida falta de un procedimiento de trabajo correcto asociado a la labor de carpintería - corregida con posterioridad a la fiscalización ante la Inspección del Trabajo- con el accidente protagonizado por el actor, para lo cual se han tenido en cuenta las circunstancias de su acaecimiento, incluida la proporción de guantes como elemento de seguridad, la demostración al menos de capacitación y charlas iniciales al ingreso para el desempeño de las labores de mantención e higiene del establecimiento comercial, concluyendo, a partir de un criterio técnico, la convergencia de una exposición imprudente al riesgo por parte del propio trabajador, quien, por lo demás, fuera de haberse desempeñado por espacio temporal algo superior a cinco meses al servicio de la empresa demandada del rubro turístico, fue objeto de la derivación médica correspondiente para recibir oportunas atenciones clínicas en la entidad especializada, tendientes al restablecimiento de su salud.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas y no obstante lo argumentado por el pretensor de anulación, se logra advertir que los vicios que se atribuyen al fallo están cimentados en este punto en generalidades, que no pasan de consistir sólo en una propuesta de valoración alternativa de la prueba, de tal forma que junto con no encasillar en el motivo estricto de invalidación planteado, concuerda en mejor forma con un mecanismo de impugnación propio de la instancia, que es del todo improcedente en esta materia; máxime si se tiene en cuenta, además, que se exige que la infracción que se acusa producida ha de ser manifiesta, es decir, susceptible de desprender de la sola lectura del fallo, lo cual tampoco ha concurrido en la especie, acorde a



la argumentación ya labrada; lo que conducirá también a la desestimación de este motivo anulatorio en lo resolutivo.

DÉCIMO TERCERO: Que, en virtud de lo razonado en los basamentos precedentes, que implican la constatación de ausencia de configuración de la causal principal y subsidiaria de nulidad invocadas, inoficioso resulta a este Tribunal ocuparse de constatar de qué forma ello pudo haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

DÉCIMO CUARTO: Que, por último y no obstante lo que se resolverá, se advierte que ha existido de parte del actor motivo plausible para haber litigado, lo que acarreará su natural consecuencia a la hora de la definición de las costas.

Por estos razonamientos, disposiciones legales citadas y visto además, lo dispuesto por el artículo 477 y siguientes del Código de Trabajo, se declara:

Que **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado don Félix Ramos Molina, en representación del demandante don Carlos Hilario Lavoiz Villarroel, en contra de la sentencia definitiva pronunciada por la Juez subrogante del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Cisnes, doña Carolina Valeska Martínez Navarrete, con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, por medio de la cual rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, la que, por consiguiente, **no es nula**.

Regístrese e incorpórese, en su oportunidad, en la carpeta digital.

Redactada por el Sr. Ministro titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°3-2025 – LABORAL.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPEHXTSKRKL



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPEHXTSKRKL

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Luis Moises Aedo M. Coyhaique, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

En Coyhaique, a diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JPEHXTSKRKL